



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Proceso monitorio para asuntos superiores a la mínima cuantía*

Daisy Paola Huérfano Herrera**

Resumen

El proceso monitorio es un trámite judicial célere, de única instancia y sin mayores ritos procedimentales; su objetivo es lograr el pago de obligaciones dinerarias que no constan en títulos ejecutivos. Sin embargo a lo anterior, el procedimiento se estableció solo para deudas de mínima cuantía, superiores a los 40 s.m.m.l.v, así lo estableció la norma como requisito para acceder a él, esto dejó por fuera el cobro de obligaciones por valores superiores, circunstancia que impide tener un mismo procedimiento y ventaja de la administración de justicia y de la ley, para el cobro de deudas superiores a los 40 s.m.m.l.v. De tal suerte que quien pretenda el cobro de sumas de dinero superiores a los 40 s.m.m.l.v., deberá acudir a otras vías judiciales, pero que carecen de la agilidad y celeridad del proceso monitorio, excesivas en el tiempo de resolución, dificultando la rápida administración de justicia. ¿ Es necesario entonces, con fundamento en el trato igual que la ley debe dar a situaciones similares, establecer el proceso monitorio para cuantías superiores a la mínima cuantía.?. Se pretenden entonces, a través del método de investigación descriptivo legal, explicar por qué se debe dar un mismo tratamiento legal a circunstancias de hecho similares, buscando se incorpore bajo este procedimiento, el cobro de deudas superiores a la mínima cuantía, y así contar con el acceso a la administración de justicia que nuestra Constitución consagra.

Palabras claves: acceso; igualdad; cuantía; competencia; proceso; proceso monitorio.

* Artículo de Reflexión presentado como Trabajo de Grado para optar al título de Abogada, bajo la Dirección de Diego Fernando Monje Mayorca, docente Facultad de Derecho Universidad Católica de Colombia. Sede Bogotá D.C.: 2020

** HUERFANO HERRERA, Daisy Paola. Optante al Título de Abogada Universidad Católica de Colombia. Sede Bogotá. E-mail: dpaolaherrera025@gmail.com

Order for payment procedure for matters above the minimum amount

Abstract

The payment order process is a fast judicial procedure, of unique instance and without major procedural rites; its objective is to achieve the payment of monetary obligations that do not appear in executive titles. However, the procedure was established only for debts of minimum amount, higher than 40 s.m.m.l.v., as established by the law as a requirement to access it, this left out the collection of obligations for higher values, a circumstance that prevents having the same procedure and advantage of the administration of justice and the law, for the collection of debts higher than 40 s.m.m.l.v. So that whoever seeks the collection of sums of money higher than 40 s.m.m.l.v, must resort to other judicial channels, but which lack the agility and speed of the payment order process, excessive in the time of resolution, making the rapid administration of justice difficult. ¿ It is necessary then, based on the equal treatment that the law must give to similar situations, to establish the payment order process for amounts higher than the minimum amount? It is intended then, through the legal descriptive investigation method, to explain why the same legal treatment must be given to similar circumstances, seeking to incorporate under this procedure, the collection of debts higher than the minimum amount, and thus to have the access to the administration of justice that our Constitution enshrines.

Key words: access; equality; amount; competition; process; monitoring process

Sumario

Introducción. 1. El proceso monitorio, antecedentes, concepto y características. 1.1 Antecedentes históricos del proceso monitorio, derecho comparado. 1.1.1 Proceso monitorio en España. 1.1.2 Proceso monitorio en Uruguay. 1.1.3 Proceso monitorio en Venezuela. 1.2. Concepto, características y tipos de procedimientos monitorios. **2. Proceso monitorio en Colombia.** 2.1. Antecedentes. 2.2. Características. 2.3. Procedimiento. **3. Acciones judiciales para el cobro de sumas de dinero.** 3.1. Proceso ejecutivo. 3.2. Proceso ordinario. 3.3. Otros mecanismos de reconocimiento de obligaciones dinerarias. **4. Proceso monitorio y el acceso a la administración de justicia.** 4.1. El proceso monitorio y su procedencia para pretensiones superiores a la mínima cuantía, barrera al acceso a la administración de justicia. 4.3. Aspectos relevantes de la sentencia C – 726 / 14. 4.4. Aspectos relevantes de la sentencia C-159/16. **Conclusiones. Referencias**

Introducción

El proceso monitorio se establece en nuestro ordenamiento jurídico en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) Capítulo IV, artículos 419 a 421; en este articulado se fija su procedencia, el contenido de la demanda y su trámite.

Es un proceso declarativo especial, en el que se decide si en cabeza del demandante está el derecho que reclama para el pago de una suma de dinero de mínima cuantía, producto de una relación contractual con su deudor.

Se pretende con el presente trabajo entender el funcionamiento del proceso monitorio en el ordenamiento jurídico colombiano, puntualizando las dificultades que se presentan al demandar sin tener un título ejecutivo, y como esta dificultad podría superarse si el proceso monitorio se aplicara al cobro de cualquier suma de dinero sin importar la cuantía, favoreciendo el acceso efectivo a la administración de justicia.

El presente artículo recopila y analiza la doctrina nacional e internacional, en la que se exponen el origen y evolución del proceso monitorio a través de los años y las particularidades que cada País ha contemplado para su implementación.

Alimentan este escrito tesis nacionales de universidades como la Universidad Católica de Colombia, en las que se condensan los principales aportes del proceso monitorio, recopilando la información obtenida de las experiencias internacionales, así como los pronunciamientos de las altas cortes de nuestro País.

Esta información recopilada se presenta y se describe a través de los antecedentes históricos de la figura, sus inicios en Italia, su paso por Alemania, España y otros países europeos, su implementación en América latina, Uruguay y Venezuela, aterrizando en la implementación que el Código General de Proceso hizo de la figura y los principales

pronunciamientos jurisprudenciales, los que a la postre determinan y concluyen lo valioso de la figura procesal.

El anterior análisis, a partir de todas sus fuentes, así como la descripción de la norma, permiten concluir el aporte valioso de la figura procesal, los objetivos loables de su concepción. Todo lo anterior también permite dilucidar los aspectos a mejorar, esto último desde la perspectiva de la práctica profesional.

1. Antecedentes del proceso monitorio

1.1 Antecedentes históricos del proceso monitorio

El proceso monitorio tuvo sus primeros asomos en el derecho italiano en el siglo XII, se buscaba en esa época como ahora, a través de un procedimiento expedito, el cobro de sumas de dinero por actividades de diversa índole, pero circunscribiéndose a la actividad comercial floreciente en esa época. (Colmenares Uribe, 2019)

El proceso monitorio toma forma y se crea el llamado *mandatum de solvendo cum clausula iustificativa* (mandato para resolver la justificación), el cual tenía como objetivo primordial responder a las necesidades de los comerciantes para cobrar las deudas derivadas de las relaciones mercantiles crecientes. (Escobar y Gutiérrez, 2015)

La actuación judicial comenzaba con la solicitud expresa del acreedor de convocar al deudor a pagar la suma de dinero pretendida, quien podía asistir o no a esa convocatoria a pagar o a defenderse de las pretensiones del acreedor, también el deudor podía obviar dicha convocatoria, circunstancias muy similares a las actuales.

Si el deudor cubría la obligación de conformidad con la solicitud del acreedor, el proceso concluía, si por el contrario el deudor se oponía al cobro, se disponía de un proceso más estructurado para resolver la controversia.

Luego de sus primeros usos en Italia, dicha figura empezó a utilizarse en países vecinos con los que se tenía relaciones comerciales; Alemania empezó a usar esta figura y a mejorarla respecto a su par italiano, creando tipos de procesos monitorios como el puro y el documental. (Colmenares Uribe, 2019)

1.1.1 Proceso monitorio en España

El proceso monitorio empezó a implementarse en este país a comienzo del siglo XXI con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 (LEC 1 /2000). Su reglamentación se ubica en los artículos 812 a 818, en donde se observan las siguientes características (Escobar y Torres, 2015)

Se reclama mediante este proceso, el pago de cualquier suma de dinero vencida y exigible, de cualquier origen o naturaleza, circunscribiéndose en cuantía de 250.000 euros.

Dentro del límite de los 250.000 euros, puede reclamarse tanto la deuda principal como los intereses debidos. Si a la reclamación de una deuda líquida (capital) se le suma la cantidad debida por concepto de intereses moratorios, no convierte en aquella en ilíquida. Evidentemente el actor tendrá que precisar la cuantía determinada en concepto de intereses de mora. (Picó I Junoy, 2012) (Picó, 2011)

En comparación con Colombia, la cuantía en la legislación española para poder acceder a este tipo proceso es considerablemente alta, estamos hablando que para el año 2020, la cuantía en pesos estaría sobre los novecientos cincuenta millones de pesos (\$ 950´000.000 MCTE), con un dólar promedio de \$ 3.800 pesos.

Para el caso colombiano, la cuantía máxima que permita acceder a este proceso, año 2020, corresponde a 40 s.m.m.l.v., que en pesos equivale a treinta y cinco millones ciento

doce mil ciento veinte pesos (\$ 35'112.120 MCTE)., gran diferencia respecto al régimen español.

La notificación al deudor debe ser personal, de no ser efectiva procede la notificación mediante edicto, lo que no ocurre en el caso colombiano, en donde procede solo la notificación personal (Rincón-Almeyda, 2017).

1.1.2 Proceso monitorio en Uruguay

El proceso monitorio en Uruguay se encuentra reglamentado en el Código General del Proceso (Ley 15.982 de 1988) Capítulo IV artículos 351 a 370.

El proceso monitorio en este país tiene unas particularidades que lo distan de los otros procesos monitorios en Latinoamérica, su objetivo es el cobro de sumas de dinero sin límite en el monto reclamado, a diferencia de España y nuestro País que si cuentan con un límite.

Sin embargo, en Uruguay se presenta una similitud de conceptos entre proceso ejecutivo y monitorio, la legislación denominó el título en donde se ubica el proceso ejecutivo y monitorio, como procesos de estructura monitoria.

La legislación uruguaya a diferencia de la colombiana, no lo ubica como un proceso declarativo, en donde el juez, en virtud de unas pruebas y de un amplísimo contradictorio, determina si en cabeza del demandante está el derecho que reclama. Por el contrario, para acudir a este proceso conforme lo estipula la legislación uruguaya, se debe tener un derecho estructurado en un documento que demuestre la obligación y su exigibilidad, es decir, se precisa cumplir con los requisitos del título ejecutivo que nuestra legislación contempla en el artículo 422 del C.G.P., con esto, el proceso monitorio uruguayo es estrictamente documental.

Este proceso se ha reservado para aquellas pretensiones cuyo objeto tiene un alto grado de certeza inicial y mínimas posibilidades de contradicción por parte del demandado (Pereira-Campos y Rodríguez, 2015).

En este proceso no se requiere agotar conciliación como requisito de trámite, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, en donde algunos jueces inadmiten y consecuentemente rechazan demandas, por no haberse agotado la conciliación previa como requisito de procedimiento, conforme lo que indica la Ley 640 de 2001.

La acción comienza con la solicitud del acreedor para el pago de una suma líquida y exigible de dinero (Capítulo IV, Artículo 353, Código General del Proceso de Uruguay, Ley 15.982 de 1988). La obligación debe constar en un título base del proceso ejecutivo. En este punto se traslapan los conceptos de proceso monitorio y ejecutivo, entendido el primero como un género y el segundo como un proceso especial.

Si el título es suficiente el juez dicta sentencia que en todo caso es preliminar, quedando su ejecución en suspenso hasta tanto el demandado conteste la demanda.

Si el demandado no comparece a ejercer defensa, la sentencia inicial se mantiene y se continúa con ella, así como las medidas de embargo que desde la sentencia se decretaron, algo similar con el mandamiento de pago y decreto de medidas cautelares que ocurre en nuestra legislación.

Si el demandado comparece y presenta oposición se abre el debate probatorio, convocando a audiencias en donde se decretan y practican pruebas; la prueba documental aportada tiene primacía, el título en donde consta la obligación.

Como se indicó, este proceso en un alto porcentaje cierra la brecha de oposición del demandado, la prueba documental es suficiente para lograr sentencia. (Loutayf Ranea, 2015)

Si las excepciones no proceden, se dicta una segunda sentencia la que es definitiva cerrando el proceso.

1.1.3 Proceso monitorio en Venezuela

El proceso monitorio en Venezuela lo encontramos en el Código de Procedimiento Civil, artículos 640 y s.s., denominado de intimación.

El procedimiento venezolano busca el pago de una suma liquida de dinero sin límite de cuantía. También procede para la entrega de una cosa fungible o mueble, el Juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación al deudor para que pague o entregue la cosa dentro de diez días apercibiéndole de ejecución (Art. 640).

El procedimiento de intimación venezolano es declarativo abreviado, pues el juez debe examinar la petición y la prueba escrita aportada (Colmenares, 2019).

El decreto de requerimiento se notificará personalmente al demandado quien deberá concurrir para contestar la demanda o pagar la suma que se indica como pretensión, si el demandado no concurre, el Tribunal le nombrará defensor al demandado quien contestará la demanda, si no lo hiciere o no exista mérito para ello, se dictará sentencia con efectos de cosa juzgada, la cual se podrá materializar a través del proceso de ejecución.

Si el demandado se opone contestando la demanda con las pruebas del caso, el juez dejará sin efectos el decreto de requerimiento que en nuestro caso sería la admisión de la demanda, con lo cual, se cita a las partes para continuar con el trámite ordinario, algo similar a lo que ocurre en nuestra legislación, en donde el proceso monitorio muta a un proceso verbal si el demandado se opone.

Este procedimiento guarda algunas similitudes con nuestro proceso monitorio, compartimos la celeridad del proceso, un trámite breve, viable para el cobro de sumas de dinero; si el demandado no contesta la demanda una vez notificado, se continua con la ejecución de la sentencia.

También existen diferencias, en la legislación venezolana se puede demandar el pago de sumas de dinero y entrega de cosas fungibles o muebles, el proceso en esencia es documental, se exige documento en donde se acredite la obligación, el sistema de notificación es más extenso, se envían comunicaciones personales y avisos que se fijan en el lugar de residencia o trabajo del demandado, así como publicaciones semanales en periódicos nacionales hasta por el término de un mes, si el demandado comparezca, el Tribunal le nombrará un defensor con quien se continuara con el trámite.

Este procedimiento guarda características similares a los demás procesos monitorios de la región, el espíritu de la norma es el mismo, simplificar los trámites judiciales para el cobro de sumas de dinero, materializando el derecho sustancial del acreedor.

El proceso es eminentemente documental, con la demanda se debe acompañar prueba de la obligación, no hay monto mínimo para su trámite, ni se debe agotar la conciliación como requisito para la acción. Si el proceso culmina con éxito para el acreedor, se dicta sentencia que es objeto de ejecución. Como en otras latitudes, se busca con este trámite, constituir un título ejecutivo a partir de una declaración judicial.

1.2 Concepto, características y tipos de procedimientos monitorios

El proceso monitorio se ha definido por varios tratadistas como un proceso declarativo especial; el proceso buscar constituir un título ejecutivo a partir de un documento que pruebe la obligación, como en el caso del proceso monitorio documental. También es viable demandar sin soporte documental alguno, como ocurre en el proceso monitorio puro,

en ambos casos, se invierte la carga de la prueba, en tanto es menester del demandado probar que no tiene a su cargo el pago de la obligación que se pretende ejecutar.

Correa-Delcasso como se cita en Nieva-Fenoll, Rivera, Colmenares y Correa-Delcasso, 2015, define al proceso monitorio como un proceso especial plenario, en donde a través de un trámite rápido y con la inversión del contradictorio, se busca la creación de un título ejecutivo con plenos efectos de cosa juzgada.

Calamandrei como se cita en Tapias-Tapias, Muñoz-Sánchez y Latorre-Merchán, 2016, hace referencia al proceso monitorio como “aquel en el que, en virtud de la simple petición escrita del acreedor, el Juez competente libra, sin oír al deudor, una orden condicionada de pago dirigida al mismo” (p. 52).

El proceso monitorio tiene como características el cobro de sumas de dinero en el menor tiempo posible y bajo los menores requisitos procedimentales, buscando constituir un título ejecutivo en la sentencia que se dicta. Diversos autores coinciden en señalar que se trata de un proceso cognitivo abreviado que tiene como finalidad esencial preparar un título ejecutivo (Nieva-Fenoll, et al., 2015).

El proceso inicia con la demanda o formulario como en el caso de España, que cumpla con los requisitos procesales propios de cada comunidad autónoma. Se contemplan requisitos generales y específicos, como la identificación de las partes, la suma debida, el documento soporte de la obligación si se tiene, o la manifestación de no contar con ningún soporte de la deuda, que la suma sea exigible y que esta no esté bajo condición alguna, como el caso Uruguay, Venezuela, España y Colombia.

El concepto también se ha construido en las normas propias de cada estado o comunidad autónoma como en el caso de España, en donde se define el proceso monitorio como aquel que pretende el pago de una suma líquida, determinada y exigible de dinero, que

conste en documentos cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello.

El proceso monitorio en Uruguay tiene una estructura distinta, asemeja los conceptos de proceso ejecutivo y proceso monitorio, el último entendido como un género y el primero como una especie. Al exigirle al demandante aportar el documento que pruebe la existencia de la obligación en el proceso monitorio, se hace la misma exigencia de aportar el título ejecutivo en el proceso de ejecución.

Por su parte indica Calamandrei, como se cita en Nieva-Fenoll et al., 2015, en el proceso monitorio se distinguen dos categorías, el proceso monitorio puro y documental. El primero se caracteriza esencialmente en que el acreedor debe aportar un documento justificativo con el escrito de petición inicial y el segundo, el puro, en que el juez profiere requerimiento de pago con fundamento en la sola afirmación unilateral y no probada del acreedor.

La principal diferencia entre los dos tipos de procesos monitorios radica en la presunción de existencia de la obligación. En el proceso monitorio puro, el legislador estimó conveniente que el acreedor no tuviera que demostrar la existencia de la relación jurídica, basta con la sola afirmación de su existencia para que proceda la petición. En el proceso monitorio documental se exige demostrar la existencia de la relación jurídica aportando prueba documental del caso. (Marín Bernal, 2015)

2. Proceso monitorio en Colombia

2.1. Antecedentes

El proceso monitorio no tiene antecedentes en la legislación colombiana, no existía la expresión monitorio en nuestro ordenamiento. Su estructura particular en relación a la

inversión de la carga de la prueba, esto es, dictar sentencia o acoger las pretensiones de la demanda antes de oír al demandado, no es nueva en el ordenamiento colombiano.

Ciertamente no se puede afirmar que la figura jurídica del proceso monitorio sea nueva en la historia jurídica colombiana. El proceso colombiano tiene elementos en los que se evidencia la existencia, desde muchos años atrás, de una técnica o estructura monitoria, que se ha utilizado casi desde los orígenes de la historia republicana de Colombia, si bien no se le ha hecho el reconocimiento explícito que le corresponde (Colmenares, 2015)

En este punto es importante definir lo que se entiende por proceso monitorio y proceso con estructura monitoria, este último entendido como aquel que precisa una forma de desarrollar el trámite jurisdiccional.

El proceso con estructura monitoria se caracteriza por la inversión de la carga de la prueba y la alteración del desarrollo usual del proceso, se dicta primero sentencia y luego se escucha al demandado quien deberá desvirtuar la decisión emitida por el juez.

Este tipo de estructura procesal exige certeza en el derecho que reclama el demandante, el documento base del proceso deberá estructurar plenamente el derecho reclamado, cerrando posibilidad de contradicción por parte del demandado.

Lo anterior implica que la prueba llevada ante el juez sea más que suficiente para dictar sentencia (caso uruguayo), admitir demanda o librar mandamiento de pago (caso colombiano), lo que invierte el proceso, primero hay pronunciamiento judicial y luego se escucha al demandado, que en todo caso podrá controvertir la decisión,

Los procesos ejecutivos en Colombia guardan una estructura monitoria, el juez a instancia del demandado dicta mandamiento de pago sin escucharlo primero, considerando suficiente el título ejecutivo para ordenar el pago de la suma debida, si el demandado guarda silencio

sin proponer excepciones se consolida la existencia del título ejecutivo manteniéndose incólume el mandamiento de pago. (Colmenares Uribe, 2019)

2.2 Características

El proceso monitorio tiene como finalidad agilizar el cobro de sumas de dinero cuando el acreedor carece de título ejecutivo, procedente solo para deudas de mínima cuantía como ocurre en el caso colombiano (Cervera, 2015)

También se puede considerar en sentido amplio, que el fin del proceso monitorio puede ser la creación de un título ejecutivo para garantizar la tutela judicial efectiva de otras pretensiones, lo que implica que uno de los fines del proceso monitorio es consolidar un derecho a través de un pronunciamiento judicial previo, constitutivo para hacerlo efectivo (Quintero y Bonnet, 2014).

En el ordenamiento jurídico colombiano el proceso monitorio no requiere prueba documental de la obligación que se pretende, basta la afirmación del demandante de la existencia de la obligación para dar marcha al proceso monitorio, y sobre esta emitir la orden de pago. Es un proceso especial, ya que tiene como finalidad sólo la creación de un título ejecutivo; de carácter declarativo y puro, donde el demandante no tiene la carga de la prueba del hecho (Loutayf- Ranea y Benavides, 2015).

Lo anterior se basa en el principio constitucional de la buena fe, en donde el acreedor con su manifestación, la cual se entiende hecha bajo la gravedad del juramento con la presentación de la demanda, promueve la acción judicial para el cobro de la suma pretendida.

La jurisprudencia ha entendido que el principio de la buena fe va en dos vías o doble vía, para el acreedor y para el demandado, así lo explica la Corte Constitucional en Sentencia C-726 de 2014 Magistrada (e) Sustanciadora: Martha Victoria Sáchica Méndez:

8.6. Sobre este punto se impone una consideración adicional, la configuración técnica del proceso monitorio está soportada en doble vía en el principio de la buena fe, ya que la orden de pago emitida por el juez surge con base en la simple afirmación unilateral y sin prueba alguna del acreedor sobre la existencia de la obligación y, su vez, la buena fe del deudor se contempla siendo que su oposición torna ineficaz la orden de pago, lo cual está acorde con la presunción de buena fe contenida en el artículo 83 de la Constitución, al reconocer la realidad de los negocios y de las relaciones civiles y comerciales, sin romper con las garantías del debido proceso (p. 39).

La buena fe se consolida para el acreedor al afirmar la existencia de la obligación en mora sin soporte alguno. Para el deudor al oponerse a tal requerimiento, contradiciendo la orden judicial de pago. Al mutar el proceso monitorio a uno verbal, con la oposición del demandado, se brindan garantías procesales y seguridad jurídica para las partes.

Las características principales del proceso monitorio se han venido esbozando en el presente escrito, las cuales se condensarán en sus particularidades procedimentales, con base en la norma colombiana de la siguiente manera:

- Celeridad: Este proceso fue concebido para resolver de la manera más oportuna posible, eliminando trámites innecesarios que demorarían la resolución de la controversia.
- Proceso declarativo especial: Este proceso fue incorporado en los procesos declarativos especiales, junto con el proceso de expropiación, deslinde y amojonamiento y proceso divisorio. A pesar de que este proceso fue ubicado dentro de los procesos declarativos especiales, solo si el deudor presenta oposición fundada, el proceso se tramitara por el trámite del proceso verbal (declarativo), si no presenta oposición o esta no es suficiente, se dictará sentencia declarativa condenando al pago.

- Con el Decreto 806 de 2020 se dio un avance importante en la implementación de las tecnologías y la comunicación para las actuaciones judiciales, desde la presentación de la demanda, notificaciones, emplazamientos, trámite de memoriales, solicitudes, traslados, audiencias, trámite de recursos entre otros. La virtualidad de la justicia y el expediente digital, favorece en gran medida el desarrollo del proceso monitorio, teniendo en cuenta que la mayoría de las disputas judiciales hacen referencia a obligaciones de contenido económico y de mínima cuantía.

En el informe de ponencia para tercer debate (Primer Debate de Senado) de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, que antecede al Código General del Proceso, sobre el monitorio se indicó:

1. Es un trámite procesal sencillo a través del cual se facilita la constitución o el perfeccionamiento del título ejecutivo sin necesidad de agotar el trámite del proceso declarativo, siempre que el deudor no plantee oposición. Procede para quien pretenda el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible y que sea de mínima cuantía.
2. Se prevé que en caso de oposición del demandado, la disputa se podrá ventilar en proceso verbal sumario dentro del mismo expediente (Colmenares, 2012, p. 343).

- Obligaciones de mínima cuantía: El proceso monitorio va encausado al cobro de sumas de dinero, pero cuyo valor no exceda la mínima cuantía fijada por el artículo 25 del C.G.P. (Ley 1564 de 2012), esto es, que el valor de las pretensiones no supere los 40 s.m.m.l.v.

- Monitorio puro. El proceso monitorio que se instituyó en nuestro ordenamiento, es el proceso monitorio puro, el cual no exige el aporte de prueba documental alguna en donde figure la obligación motivo del proceso.

En este punto es necesario distinguir dos tipos de procesos monitorios, con base en uno de los requisitos para dar trámite a la demanda, y es el de tener o no prueba documental en donde conste la obligación que se reclama, si el ordenamiento jurídico del país exige prueba documental para acceder a este proceso, dicha acción sería denominada monitorio documental, si no se exige prueba documental, se denomina proceso monitorio puro.

El proceso monitorio documental se caracteriza por la exigencia de un título documental, normalmente firmado por el deudor, que ha vista prima facie incorpora la existencia de una deuda (Colmenares, 2019)

- **Obligación en dinero.** La reclamación que se lleva al proceso monitorio debe versar sobre el cobro de sumas de dinero exclusivamente, esto excluye el pedimiento de otras cosas muebles, inmuebles, acciones, títulos o ejercer algún tipo de acción o no hacerlo. Adicional a esto, el plazo para el pago debe estar vencido, siendo exigible por el demandante, la suma debida debe estar determinada con claridad, su concepto y monto.

- **Naturaleza contractual.** La naturaleza de la obligación de las que se deriva el cobro de las sumas de dinero arriba señaladas debe ser contractual, producto de una relación entre comprador y vendedor, prestador de un servicio, contratante y contratista, no procede para el cobro de sumas de dinero producto de una relación laboral, de alimentos, indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil, el abanico es amplio en este aspecto, aunque al momento de la presentación de la demanda se deberá determinar con claridad esa relación contractual, que no riña con otras disposiciones especiales.

2.3 Procedimiento

El procedimiento se encuentra regulado en tres artículos del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) artículos 419 al 421.

La acción se deberá tramitar a través de demanda, con la posibilidad de que el demandante sea representado o no por abogado; por ser asunto de mínima cuantía es posible su trámite sin de apoderado.

La demanda deberá contar con los mismos requisitos generales exigidos por la norma procesal para otros asuntos, enumerados en el artículo 82 del C.G.P. Adicionalmente para el caso del proceso monitorio, el demandante deberá manifestar que la suma pretendida no depende ni está sujeta a condición alguna para su pago. (C.G.P. Ley 1564 de 2012, art. 420, num. 5).

Son viables todos los medios de prueba establecidos, la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualquier otro medio que sea útil para la formación del convencimiento del juez (C.G.P. Ley 1564 de 2012, art. 420, num. 6).

El demandante deberá aportar con la demanda los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentren en su poder. Cuando no los tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda, que no existen soportes documentales” (C.G.P. Ley 1564 de 2012 y Villamil, 2016, p. 6)

La anterior posibilidad define al proceso monitorio como puro, por permitir iniciar la demanda sin prueba documental de la obligación, sin embargo, la norma también insta al demandante para que aporte prueba documental de la obligación si la tiene en su poder o indicar en qué lugar se encuentra.

Cumplidos los requisitos para la presentación de la demanda el juez requerirá al demandado para pagar la suma pretendida o exponer las razones por las cuales no debe en todo o en parte. Dicho requerimiento se notificará personalmente al demandado, sin la

posibilidad de notificar mediante aviso (Sentencia C-726/14. Proceso Monitorio, Referencia: Expediente D-10115. Magistrada (e) Sustanciadora: Martha Victoria Sáchica Méndez).

El requerimiento de pago no admite recurso, en él se ordena al demandado pagar la suma reclamada o contestar la demanda proponiendo las excepciones o razones concretas para oponerse al requerimiento, el pago o defensa deberá ejercerlas el demandado dentro de los 10 días siguientes a la notificación del auto.

El demandado notificado tiene 3 opciones a ejercer en el proceso; pagar la suma pretendida, conforme el auto admisorio, en este caso el proceso termina por pago total de la obligación; oponerse al requerimiento en todas sus partes, o parcialmente sobre una suma determinada; o no comparecer al proceso, no contestar, mostrándose renuente al requerimiento de pago.

Si el demandado se opone de manera concreta, aportando las pruebas del caso y que fundamentan su oposición, el proceso muta y se seguirá el procedimiento establecido para los procesos verbales sumarios (mínima cuantía), bajo sus etapas distintivas, otorgando al demandante cinco días para pedir nuevas pruebas, previo al auto que fija fecha para la audiencia del artículo 392 del C.G.P.

Si el demandado no se opone, guardando silencio, sin comparecer al juzgado, el despacho dicta sentencia de conformidad a las pretensiones de la demanda y al auto admisorio, en donde se declara que el demandado adeuda la suma pretendida, condenándolo adicionalmente a las costas causadas.

La sentencia que se produce es el título ejecutivo que pretende el demandante hacer efectivo en el proceso ejecutivo que se puede seguir a continuación del proceso monitorio, de conformidad a lo normado por el artículo 360 del C.G.P. Se dicta sentencia solamente en el escenario que el demandado no se oponga, si lo hace, se le brindan otras oportunidades

procesales para que haga valer sus derechos, esto a través del proceso verbal sumario. (Corchuelo y León-Gil, 2016)

Con la sentencia es viable solicitar medidas cautelares propias del proceso ejecutivo.

Este proceso no admite el emplazamiento, excepciones previas, demanda de reconvencción, intervención de terceros o nombramiento de curador ad litem, esto en razón a que se busca resolver de manera más ágil los asuntos bajo su conocimiento, prescindiendo de trámites que lo pueden tornar lento e ineficaz.

3. Acciones judiciales para el cobro de sumas de dinero

Se indican a continuación algunas diferencias entre procedimientos tendientes al cobro de sumas de dinero:

TABLA COMPARATIVA OTROS PROCEDIMIENTOS PARA EL COBRO DE SUMAS DE DINEO			
PROCESO EJECUTIVO	PROCESO VERBAL O DECLARATIVO	INTERROGATORIO DE PARTE COMO PRUEBA ANTICIPADA	CONCILIACION
1. Se requiere de título ejecutivo para su trámite.	1. No se requiere título ejecutivo; se pretende declarar la obligación a cargo del demandado.	1. No se requiere título ejecutivo; se pretende declarar la obligación a cargo del demandado.	1. Puede o no existir título ejecutivo, se pretende un arreglo común entre las partes para el pago de la suma de dinero.
2. Se pueden solicitar medidas cautelares previas con la presentación de la demanda.	2. Con la sentencia en firme se pueden pedir medidas cautelares.	2. Con la declaración judicial se inicia el proceso ejecutivo en donde se pueden solicitar medidas cautelares.	2. No hay lugar a medidas cautelares.
3. No es necesario agotar previamente conciliación como requisito para demandar.	3. Es necesario agotar la conciliación previamente a demandar.	3. No es necesario agotar previamente conciliación como requisito para demandar.	3. No aplica.

4. Proceden todos los tipos de notificación al demandado, se puede emplazar y nombrarle curador ad litem.	4. Proceden todos los tipos de notificación al demandado, emplazamiento y designar curador ad litem.	4. Se debe notificar personalmente al demandado para que concurra y responda el interrogatorio.	4. Se debe notificar al deudor para que concurra personalmente a la audiencia de conciliación.
5. No hay límite en la cuantía de la obligación para su trámite.	5. No hay límite en la cuantía de la obligación para su trámite.	5. No hay límite en la cuantía de la obligación para su trámite.	5. No hay límite en la cuantía de la obligación para su trámite.

Las medidas cautelares en el proceso verbal u ordinario son más restrictivas debido a la incertidumbre del derecho en debate, puede resultar afectado el demandante si no se decreta la medida cautelar, como el demandado si se prueba que no existía violación de derecho alguno (Bolívar, 2018).

En el proceso ejecutivo no hay limite en las medidas cautelares nominadas e innominadas previstas en el Código General del Proceso, las enunciadas en el artículo 593.

El Código General del Proceso faculta a la parte ejecutante para que desde el momento en que se presente la demanda, se pueda embargar y secuestrar los bienes a cargo de la parte demandada. (González 2017)

4. Proceso monitorio y el acceso a la administración de justicia

Es indudable que uno de los fines del proceso monitorio es garantizar la protección del crédito accediendo a su tutela efectiva, a través de un procedimiento célere y de menor ritualidad, disminuyendo la mora judicial.

Es así como el proceso monitorio vio la luz en el Código General del Proceso, que con tan solo tres artículos pretende dirimir gran parte de las controversias dinerarias de

mínima cuantía, como ocurre en España, en donde solo siete artículos que conforman el proceso monitorio, regulan casi la mitad de sus litigios (Picó, 2011).

En la exposición de motivos del proyecto de L. 1564 de 2012, se pensó en el proceso monitorio como aquel trámite que permitiera la descongestión de la administración de justicia, en los asuntos de mínima cuantía que componen el porcentaje más alto de litigios.

El proceso monitorio junto con otras novedades procedimentales que trae consigo el Código General del Proceso, como la carga dinámica de la prueba, emplazamientos más expeditos, notificaciones electrónicas, expediente digital, pretende dinamizar y agilizar tanto el acceso a la administración de justicia como una resolución más expedita.

4.1. El proceso monitorio y su procedencia para pretensiones superiores a la mínima cuantía y la barrera de acceso a la administración de justicia.

El proceso monitorio pretende el recaudo judicial de sumas de dinero de mínima cuantía, excluyendo el cobro de obligaciones superiores.

La finalidad de este proceso es proteger de manera efectiva la tutela del crédito, garantizando los derechos económicos de los pequeños y medianos acreedores, buscando crear un título ejecutivo para el que deudor pueda ser ejecutado y se satisfaga la obligación incumplida. (Luna Salas & Nisimblat Murillo, 2017) (Luna y Nisimblat, 2017).

El legislador pensó y así lo concibió en la norma, que la mayoría de las personas y empresas pequeñas no documentaban sus créditos a través de títulos ejecutivos, esto es, que no expedían factura o documento similar que les permitiera ejecutar la obligación, presumió el legislador, que esta circunstancia se presentaba solo en negocios de pequeña estructura, los demás si expedían facturas o títulos ejecutivos en legal forma.

Sin embargo, se presentan varios casos en transacciones comerciales de menor y mayor cuantía, en donde no se expide factura o título ejecutivo, bien por ignorancia de la norma o por la confianza, en las que no se documenta en legal forma las ventas a crédito, entendiéndose no se expide factura, o expidiéndose factura esta es una copia, o es original pero no está firmada ni aceptada por el comprador, sin fecha de recepción, entre otras circunstancias que la invalidarían para servir como título ejecutivo.

Quiere decir lo anterior, que si hay eventos en los que las empresas de cualquier tamaño no expiden factura de venta o título ejecutivo en legal forma, por lo que la presunción que solo los negocios pequeños son los que no expiden factura o título ejecutivo no es cierta.

Hay negocios pequeños que guardan rigurosidad en la expedición y manejo de sus títulos ejecutivos (facturas), también hay empresas medianas y grandes que no lo hacen, esta distinción que hizo la norma no debió darse por la persona acreedora, ni por la cuantía, solo por la circunstancia de tener o no título ejecutivo en legal forma.

La mayoría de los litigios en el país los protagonizan los asuntos de mínima cuantía, siendo esto uno de los objetivos de la implementación del proceso monitorio en Colombia.

Basta con mirar los estados de cualquier juzgado, la mayoría de los procesos se relacionan con el cobro de sumas de dinero y de mínima cuantía, tal circunstancia no debió encasillar al proceso monitorio solo a los asuntos de mínima cuantía, sus alcances debieron extenderse al cobro de cualquier suma de dinero, como ocurre en la mayoría de países en donde esta figura se aplica.

La procedencia del proceso monitorio solo para asuntos de mínima cuantía, se constituye como una limitante al acceso de administración de justicia. Podría pensarse que hay otros procedimientos que tiene el acreedor para perseguir la suma adeudada, sin embargo y como se analizó con los otros procesos para el cobro de sumas de dinero, el acceso a la administración de justicia no solo hace referencia a que tantos mecanismos tiene el ciudadano

para hacer efectivo su derecho, sino a valorar como un simple procedimiento de tres artículos, célere y eficaz, puede servir para minimizar la mora judicial, por lo que hablar de acceso administración de justicia también hace referencia a una justicia oportuna.

Un ejemplo cotidiano se presenta en el caso de una empresa X que ha vendido mercancías por valor de 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 20 salarios por encima de la mínima cuantía, sin tener la precaución de llevar en legal forma la factura soporte de la transacción, en este escenario, esta sociedad quedaría por fuera de los alcances y beneficios del proceso monitorio, viéndose en la obligación de iniciar otros trámites jurisdiccionales más dispendiosos.

En el ejemplo anterior el acreedor tiene varias alternativas jurídicas para lograr ese pago, unas más extensas y otra improcedente como el proceso monitorio.

Un proceso ejecutivo no lo puede emprender por que la factura de venta no cumple con los requisitos del título ejecutivo. La conciliación en derecho puede servir si el deudor asiste, firma el acuerdo y lo cumple, aunque puede darse incumplimiento. La otra alternativa es el proceso verbal (declarativo), pero este puede ser excesivamente largo y dispendioso.

En este escenario, si el proceso monitorio fuera procedente para asuntos de menor y mayor cuantía, el acreedor tendría una alternativa más célere y eficaz.

Este caso y otros miles evidencia la necesidad lógica de su implementación a cuantías superiores, que fuera útil a más ciudadanos, pero lamentablemente el legislador no vio más allá, con su restricción dejó por fuera miles de conflictos que podrían resolverse en menor tiempo, descongestionando el aparato judicial.

La alternativa entonces a esta problemática es modificar la ley, que el legislativo no restrinja la aplicación de este proceso a la cuantía de la deuda, pensando no en la calidad del acreedor, persona natural, pequeño comerciante, informal, microempresa, etc., no es el punto

de la discusión, tampoco la discusión es si la obligación es poca o mucha, la base de la problemática es el no contar con un título ejecutivo idóneo para garantizar el crédito, el que se permite construir a través del proceso monitorio.

4.3. Pronunciamientos de la Corte Constitucional

Importantes pronunciamientos ha tenido la Corte Constitucional respecto a este trámite, como el de la sentencia C - 726 de 2014 que declara exequible el proceso monitorio.

La sentencia C-159 de 2016 valida los argumentos de exequibilidad del anterior pronunciamiento, aunque en este caso se examina si la norma va en contravía de la Constitución al haber contemplado que solo las obligaciones de contenido económico eran las procedentes para este trámite.

Los argumentos de la Corte en la sentencia C - 726 de 2014 para declarar su exequibilidad se enmarcan en el debido proceso e igualdad de la partes, derechos que para los demandantes son vulnerados al dictarse sentencia solo con la declaración del demandante, circunstancia que la Corte controvierte acertadamente.

Indica la Corte Constitucional que en este proceso se dan todas las garantías de contradicción al demandado, en tanto el proceso monitorio es un trámite dúctil, en el que se prescinde de trámites e instancias en procura de resolver rápidamente en la construcción de un título ejecutivo.

Indica la Corte que la ductibilidad del proceso monitorio radica en que la construcción del título ejecutivo depende de la conducta del deudor, así como la inversión de la carga de la prueba, en tanto el requerimiento de pago (admisión de la demanda) se da previo a la comparecencia del demandado, a partir de ese requerimiento y de la postura de defensa que tome el demandado o su silencio, se dan las consecuencias jurídicas previstas en la norma, por

lo que el derecho de defensa está en manos del demandado, en atender prontamente el requerimiento judicial y a partir de allí ejercer la posición que más le convenga.

En el proceso verbal se debate, se practican pruebas y se dicta sentencia, en este proceso pasa lo contrario, el requerimiento de pago sirve eventualmente como sentencia y título ejecutivo si el demandado no se opone.

La sentencia C-159 de 2016 analizó si era contrario a la Constitución, que el proceso monitorio fuera procedente solo para las obligaciones por sumas de dinero, dejando de lado otras obligaciones como las de hacer o dar.

Sin embargo para la Corte, el legislador en su amplia facultad de configuración legislativa, consideró que el proceso monitorio no era el medio para exigir el cumplimiento de otras obligaciones distintas a las dinerarias, existiendo otros procedimientos para perseguir obligaciones como las de hacer o dar, como el interrogatorio de parte como prueba anticipada, conciliación o proceso verbal.

Conclusiones

El proceso monitorio es un avance en nuestra legislación y una novedad en el procedimiento civil colombiano, aunque tiene una larga tradición en Europa y otros países de Latinoamérica.

El proceso monitorio no es una figura jurídica nueva, pero se constituye como un proceso judicial ágil, eficiente, eficaz, económico y dinámico que facilita las relaciones crediticias entre los particulares.

El legislativo buscó con la reglamentación del proceso monitorio en el Código General del Proceso, contribuir con la recuperación efectiva de las ventas a crédito de pequeños comercios, resolviendo prontamente las dispuestas contractuales de mínima

cuantía a través de un proceso especial, con menos ritualidades procesales, privilegiando el derecho sustancial sobre el procedimental.

Sin embargo, la norma estableció que solo el cobro de sumas de dinero de mínima cuantía podía ser tramitado a través del proceso monitorio, dejando por fuera las obligaciones de menor y mayor cuantía, desaprovechando la oportunidad de aplicar un mismo procedimiento a situaciones similares.

Algunas empresas no expiden títulos ejecutivos en sus negociaciones, en el caso de las facturas de venta, muchas presentan falencias en su comercialización, no están firmadas, no tienen fecha de recepción, son copias, etc., esto dificulta su exigibilidad en los procesos ejecutivos; estas falencias se presentan sin importar el monto de la obligación, sobrepasando en muchos casos la mínima cuantía.

La anterior dificultad la vemos con frecuencia en la práctica profesional, en donde observamos que al circunscribir el proceso monitorio solo a los asuntos de mínima cuantía, aleja la posibilidad de un trato igual de la ley a situaciones similares, esta segregación causa dificultades para acceder a una justicia oportuna, como se indicó, no es suficiente que existan otros procedimientos legales para hablar de acceso a la administración de justicia e igualdad, lo apropiado es que una mejor vía judicial como el proceso monitorio, sea útil para más ciudadanos.

Referencias

Bejarano Guzmán, R. (2019), *Procesos Declarativos, arbitrales y ejecutivos*. (9ª ed.). Bogotá D.C: Temis S.A.

Bolívar Mesa, M. A. (2018). *Las medidas cautelares innominadas y su relación con el principio de legalidad*. (Artículo de Reflexión Trabajo de Grado). Facultad de Derecho. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá D.C.

- Calamandrei, P. (2007). *El Procedimiento Monitorio*. Buenos Aires: Librería El Foro
- Cervera Martín, A.M. (2015). *El proceso monitorio, perspectiva comparada*. Bogotá: Ediciones Leyer.
- Colmenares, C. (2012). El proceso monitorio en el Código General del Proceso. *Memorias del XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal Universidad Libre (1160-1161)*. Bogotá DC.C: Universidad Libre. Recuperado de <https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/14carlos-alberto-colmenares.pdf>
- Colmenares Uribe, C.A. (2019). *El proceso monitorio en el contexto iberoamericano*. Bogotá: Ediciones Doctrina y ley.
- Corchuelo Uribe, D., y León- Gil, M. (2016). La oposición eficaz. Análisis basado en el proceso monitorio del Código General del Proceso. *Revista de Derecho Privado*, 30, 339-369
- Correa Delcasso, J. P. (2000). *El proceso monitorio de la Nueva Ley*. Barcelona: Bosch
- Escobar Torres, S. y Molano Gutiérrez. M.S. (2015). Desmitificando el proceso monitorio: críticas e interrogantes acerca de su implementación en el ordenamiento procesal colombiano. *Univ. Estud.* 12: 135-169, Recuperado de <https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/documents/3722972/6187126/6+Escobar-Molano.pdf/931b1b00-170a-426a-ab76-10f0ecaaa845>.
- González Lizarazo, L. M. (2017). *Algunos cambios generados por la entrada en vigencia del Código General del Proceso*. (Artículo de Reflexión Trabajo de Grado). Facultad de Derecho. Universidad Católica de Colombia. Bogotá D.C.

- Loutayf- Ranea, R., & Benavides, Á. (2015). El camino hacia el proceso monitorio: la integración como paradigma. *Revista Academia & Derecho*, 6(10), 185, 215.
- Luna Salas, F. y Nisimblat, N. (2017). El proceso monitorio: Una innovación judicial para el ejercicio de derechos crediticios. *Revista Jurídica Mario Alario D'Filippo*, 9(17), 154-168.
- Marín Bernal, A. (2015). *El proceso monitorio en el nuevo código general del proceso y un estudio comparado en latinoamérica*. (Artículo de Reflexión Trabajo de Grado). Facultad de Derecho. Universidad Católica de Colombia. Bogotá D.C.
- Nieva-Fenoll, J., Rivera, R., Colmenares, C. y Correa-Delcasso, J.P. (2015). *El procedimiento monitorio en América Latina. Pasado, presente y futuro*. Bogotá: Temis.
- Pereira Campos, S. y Rodríguez, C. (2015). El proceso monitorio en Uruguay. *Revista CADE Doctrina y Jurisprudencia*, 33, 13-20.
- Picó, J. (2011). El proceso monitorio. Una visión española y europea de la tutela rápida del crédito. *Revista del Instituto Colombiano de Derecho Probatorio*, 37(37), 3-29. Recuperado de file:///C:/Users/Administrador/Downloads/55-269-1-PB.pdf.
- Quintero Pérez, M., y Bonett Ortiz, S. (2014). El proceso monitorio. Tendencia del derecho procesal iberoamericano. *Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal*, 40, 345-363.
- Rincón-Almeyda, A. (2017). Proceso monitorio: ¿qué hacer cuando no se logra notificar personalmente al demandado?. *Dixi Revista* 19(25), 49-58.

Sánchez Novoa, P.A. (2015). Hacia un proceso monitorio en Colombia. *En Justicia Revistas Científicas Universidad Simón Bolívar*, 28, 139-150

Tapias- Tapias, A., Muñoz-Sánchez, R.E. y Latorre-Merchán, R.R. (2016). Algunas vicisitudes del proceso monitorio en Colombia: una visión desde la academia. *Dixi Revista*, 18(24, 49-62. Recuperado de <https://revistas.ucc.edu.co/index.php/di/article/view/1522/1933>.

Villamil Castro, L. K. (2016). El proceso monitorio en el nuevo código general del proceso: un análisis sobre su relación con el interrogatorio de parte para crear la obligación civil. (Artículo de Reflexión Trabajo de Grado). Facultad de Derecho. Universidad Católica de Colombia. Bogotá D.C.

Normatividad Nacional

Constitución Política de Colombia (1991). *Revisada y actualizada*. Bogotá: Legis. Recuperado <http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf>

Ley 1564 de 2012 (julio 12). Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, Bogotá D.C: Congreso de Colombia. *Diario Oficial* 48.489 del 12 de julio de 2012

Ley 640 de 2001 (enero 5). Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C: Congreso de Colombia. *Diario Oficial* 44.303 del 24 de enero de 2001

Normatividad Internacional

Código de Procedimiento Civil Venezolano (18 de septiembre de 1990). Caracas Congreso de la República de Venezuela. Gaceta oficial 4.209. Recuperado de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ve/ve044es.pdf>

Ley 1/ de 2000 (enero 7) Ley de Enjuiciamiento Civil. Madrid, España: Jefatura del Estado *BOE* 7 Referencia BOE A- 2000-323 número 7 del 08 de enero de 2000. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-323-consolidado.pdf>

Ley 15.982 de 1988 (Octubre 18) *Código General del Proceso de Uruguay*. Recuperado de <https://www.impo.com.uy/bases/codigo-general-proceso/15982-1988>

Jurisprudencia

Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena (24 de septiembre de 2014). Sentencia C-726/14. Proceso Monitorio, Referencia: Expediente D-10115. Magistrada (e) Sustanciadora: Martha Victoria Sáchica Méndez.

Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena (6 abril 2016). Sentencia C-159/16. Proceso Monitorio. Referencia: expediente D-10969. Magistrado Ponente: Luís Ernesto Vargas Silva.